

LAS ELITES BOLIVIANAS Y LA CUESTION NACIONAL,  
1899-1920<sup>1</sup>

MARTA IRUROZQUI VICTORIANO

*Centro de Estudios Históricos. CSIC*

*Madrid*

## 1. INTRODUCCION

El presente trabajo es una reflexión sobre las posibles razones que explican por qué Bolivia no llegó a conformarse como Estado Nacional, esto es, como aparato institucional y de dominación con capacidad de responder a las demandas de progreso de la élite boliviana. Esta propuesta de investigación se estructura en tres partes. En la primera se abordan las posturas historiográficas bolivianas acerca de la relación entre élite y Estado-nación; en la segunda se discute el significado y alcance que a principios del siglo XX poseen tales términos; y en la tercera se esboza una propuesta de interpretación alternativa que hace hincapié en el proceso de restructuración y reconversión de la élite<sup>2</sup> como su objetivo político prioritario, subordinado a este propósito la idea de un proyecto nacional.

Los temas de trabajo indicados constituyen un adelanto de una investigación en marcha, por lo que no se pretende dar una versión exhaustiva de las cuestiones que se examinan ni adjuntar información concreta que lo convierta en un estudio de caso y no en un modelo aplicable a la realidad de otros países. Por otro lado, no se olvide que esta es una investigación sobre cómo la élite se ve a sí misma y qué es lo prioritario para ella, por lo que si bien su

---

1. Proyecto financiado por el Plan I+D AME 90-0849-C02-01.

2. Se emplea este término como sinónimo de oligarquía y burguesía nacional, que son las denominaciones más repetidas aunque no definidas entre los autores analizados. Se trata de un concepto englobador de aquellos sectores sociales que poseen poder político y económico y de aquellos otros que constituyen su margen de reclutamiento y reserva. Cuando se habla de élite se hace referencia a grupos heterogéneos, aún no consolidados como clase aunque compartan una herencia corporativa. Son grupos de poder diversificado que se extienden en todos los aspectos del proceso de desarrollo y que gestionan intereses muy variados. Los mecanismos que sus distintos miembros emplearan para conformarse como un sector lo suficientemente fuerte socialmente como para construir un proyecto que les salvaguarde como grupo social preeminente serán objeto también de discusión en este artículo.

comportamiento es resultado de la interacción con grupos sociales subalternos las razones y demandas de estos últimos no importan en sí mismas sino en la medida en que la élite puede instrumentalizarlas.

## 2. EL DEBATE SOBRE EL ESTADO NACIONAL EN LA HISTORIOGRAFÍA BOLIVIANA

Las posiciones historiográficas bolivianas sobre la realidad o no de la construcción de un Estado Nacional se entienden en función del tipo de élite que define cada uno de sus autores. Y esto ocurre tanto porque se las considera las encargadas de la gestión de dicho Estado, como porque se las ha visto presentes en tal proyecto, aunque ello no implique la exclusión de otros grupos sociales. Así, de la contraposición entre élite progresista y dinamizadora del país, y élite entreguista y dependiente surgen diversas aproximaciones acerca de las características de Bolivia como Estado nación. Aparecen, por tanto, dos bloques interpretativos iniciales. El primero lo integran los historiadores que resaltan la trascendencia de las obras realizadas por los «patriarcas de la plata» y «los barones del estaño». Identifican obras públicas con progreso para insistir más tarde en el protagonismo de estos mismos grupos en el proceso de industrialización, dinamización y liberalización económica de Bolivia, al tiempo que subrayan su conciencia de dirigir un país nuevo y no una sociedad tradicional. En su mayoría defienden su conformación como Estado nacional moderno adjudicando tal hecho a las iniciativas modernizadoras de los grandes propietarios mineros, pero en los casos en que afirman que ese proceso no llegó a darse, la culpa de su no conclusión no recae sobre esas élites progresistas sino que se achaca a las pervivencias coloniales<sup>3</sup>.

Contrario a la opción historiográfica denominada tradicional, aparece un segundo grupo de historiadores que acusa a la «élite» de incapacidad para convertir a Bolivia en nación. No lo consiguió porque intentó construir un país sin resolver la cuestión nacional, es decir, la integración de los diversos grupo sociales y étnicos. A esto se añade que tampoco se considera a la élite un agente central de industrialización ya que es ante todo consumidora y sólo apoya el proceso de modernización nacional para procurarse los bienes que le son necesarios en una coyuntura de crisis del mercado internacional. En su mayoría, tales acusaciones están referidas al grupo liberal (1900-1921) al considerarse que tras la guerra federal de 1899 este sector tuvo la oportunidad de gestar la dependencia y miseria actual que vive Bolivia. Dado que esta postura es mayoritaria en los análisis historiográficos bolivianos, hechos tanto por nacionales como por extranjeros, resulta conveniente establecer una tipología de la élite a partir de la historiografía sobre el tema:

---

3. Ramiro Condarco Morales, Aniceto Arce. Artífice de la extensión de la revolución industrial en Bolivia, ed. Amerindia, La Paz, 1985.

A. *Elites sin ideología hegemónica*. Se culpa a la oligarquía de no constituir un grupo de poder aglutinante, creador de una estructura nacional subordinada a sus intereses que hubiese servido de plataforma a los procesos de integración de los que resulta la formación de un Estado moderno<sup>4</sup>. Su responsabilidad residiría en continuar bajo los mismos indicadores del despotismo «feudal» del periodo caudillista y conservador, ya que gracias a éstos se beneficiaron de la riqueza nacional sin el esfuerzo de levantar el país. La carencia de voluntad hegemónica fue entonces lo que la hizo constituirse en «una clase dominante con ideología prestada, característicamente alienada y carente de conciencia nacional»<sup>5</sup>. Así, en ningún caso se cuestiona la legitimidad de la élite como constructora de naciones sino que se la critica por no cumplir adecuadamente con lo que se supone que es su papel social.

B. *Elite precapitalista*. El hecho de que la oligarquía pretendiese construir un país sin resolver la cuestión nacional significaba que pensaba articular bajo el dominio de una estructura agraria «feudal» el modo de producción capitalista. La condición de hacendados rentistas les impedía romper con las estructuras precapitalistas que dificultaban la ampliación del mercado interno y la creación de un nuevo orden social<sup>6</sup>. Por tanto, la oligarquía no sólo representaba un proyecto incapaz de superar los bloques de una herencia ideológica colonial, sino que también fue absorbida por la avalancha imperialista al quedar vinculada su visión y ganancia con el exterior. Así, la clase señorial boliviana resultó incapaz de reunir en su seno las condiciones subjetivas y materiales para autotransformarse en una «burguesía moderna» al carecer de valores burgueses y estar escindida entre elementos capitalistas y precapitalistas. Esto hizo de la oligarquía no una clase social sino una serie de individuos interesados ante todo en el aumento de su fortuna y la defensa del clan familiar. Tal aspecto se complicaba con la ausencia de una articulación interregional que hubiese sido posible de haberse dado la modernización del agro, lo que tampoco ocurrió porque las élites regionales se consideraban a sí mismas, no como la dirección moral de la nación, sino como las proveedoras del equi-

---

4. Sergio Almaraz, *El poder y la caída*. Ed. Los amigos del libro, La Paz, 1987, págs. 89-90. Juan Albarracín, *El poder minero*, ed. Urquiza, La Paz, 1972.

5. Gabriel Ponce, «En torno a la naturaleza del Estado oligárquico», en *Avances*, n.º 2, La Paz, 1978, p. 168.

6. León Bieber, *Empresarios mineros en el siglo XIX. Bases para su caracterización social*. IESE, Cochabamba, 1980. Antonio Mitre, «La minería boliviana en el siglo XIX» en AAVV, *Estudios bolivianos en homenaje a Gunnar Mendoza*, La Paz, 1978. Antonio Mitre, *Los patriarcas de la plata*, IEP, Lima, 1981. Silvia Rivera Cusicanqui, «Rebelión e ideología: lucha del campesinado aymara del altiplano boliviano, 1910-1920» en *Historia boliviana*, n.º 1-2, Cochabamba, 1981. Silvia Rivera Cusicanqui, «La expansión del latifundio en el altiplano boliviano: elementos para la caracterización de su oligarquía regional» en *Avances*, n.º 2, La Paz, 1978. Gustavo Rodríguez, «Acumulación originaria, capitalismo y agricultura precapitalista en Bolivia, 1870-1885», en *Avances*, n.º 2, La Paz, 1978. Gustavo Rodríguez, «Librecambismo y el carácter del capitalismo: el caso boliviano» en AAVV, *Estudios en homenaje a Gunnar Mendoza*, La Paz, 1978. Gustavo Rodríguez, «Mercado interior y conflictos regionales: Santa Cruz, 1891-1952» en *Historia boliviana*, n.º 7, La Paz, 1987.

librio que requería ésta para romper con las asimetrías entre el poder central y el poder local<sup>7</sup>.

C. *Elite definida por la negación de lo indio*. La élite carecía del ímpetu de autodeterminación necesario para la construcción nacional porque se veía acosada desde el interior del país por la población indígena. El sentimiento racista que expresaba hacia ella la condujo a transformarse en una clase entre-guista<sup>8</sup>, y, en consecuencia, a subordinar un proyecto de unificación nacional a otro de dominación.

D. *Elite conformadora de una nación inconclusa*. Parte de la historiografía boliviana insiste en que el porvenir del país está subordinado al redescubrimiento del ser nacional. De ahí que ante el fracaso de la élite como gestadora de un Estado nación eficaz se desarrollen posiciones centradas en el arraigo de las identidades étnicas y de sus valores y, por tanto, en la reivindicación de las nacionalidades autóctonas. Se trata de impugnar el actual Estado boliviano «señorial y burgués» y reemplazarlo por uno «nacional-popular»<sup>9</sup>. Y lo popular lo constituyen primero el indio-campesino y, más tarde, el proletariado minero, al considerárseles los únicos sectores capaces de dar una respuesta colectiva ya que por su pasado y actividad logran combinar formas de doble contenido: moderno y arcaico, revolucionario e indígena<sup>10</sup>.

En general, la mayoría de los autores revisados sustentan la tesis desarrollada por Alberto Flores Galindo y Manuel Burga acerca de que la oligarquía no fue una clase dirigente. Esta negación se desarrolla a partir de tres presupuestos que insisten en la dependencia de la oligarquía del capital imperialista, en su incapacidad para articular a otras clases en torno a sus objetivos y en la carencia de un sustrato cultural común con las clases populares<sup>11</sup>. Tales principios se aplican y repiten en muchos casos sin ningún tipo de reflexión, dejando entrever que la búsqueda de los orígenes nacionales y de la conformación de un Estado nacional manifiesta más una preocupación contemporánea que real<sup>12</sup>, que, a su vez, conlleva una dependencia de modelos extranjeros de modernización que impide reflexionar sobre las especificidades locales. El nexo que existe en la historiografía boliviana entre el debate político-ideológico y la interpretación histórica conduce a la condena de las experiencias nacionales bolivianas por inadecuación a los casos «con éxito» de Europa y Norteamérica. En consecuencia, la élite es acusada de no ser suficientemente

---

7. Gustavo Rodríguez y Humberto Solares, *Oligarquía, Chicha y cultura popular*, ed. Serrano, Cochabamba, 1990. Gustavo Rodríguez, *El regionalismo cochabambino, siglos XIX y XX*, ed. Ceres-Ildis, Cochabamba, 1991.

8. René Zavaleta Mercado, *Lo nacional-popular en Bolivia*, ed. Siglo XXI, México, 1986.

9. *Ibidem*.

10. Silvia Rivera Cusicanqui, 1981.

11. Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, *Apogeo y crisis de la República aristocrática*, ed. Bilochay, Lima, 1984, p. 90.

12. Un ejemplo de repetición dogmática de las tesis aludidas lo manifiesta la Tesis de licenciatura en Sociología de Roberto Laura, *Constitución de la oligarquía de La Paz, 1870-1900*, La Paz, 1988.

burguesa, ya sea por el papel desarrollado por la propiedad agraria tradicional, ya sea, en sentido weberiano, porque carecía de un auténtico espíritu capitalista. Pero en contrapartida, los que parecen demostrar un auténtico espíritu burgués son el campesinado indígena y la clase obrera revolucionaria.

De esta forma se llega a la simple concepción de una burguesía que tenía rasgos no burgueses, de tipo señorial, y que por lo tanto no era una auténtica burguesía capaz de llevar a cabo una innovación capitalista. Para ello se presupone también la obligatoria responsabilidad de la élite en el proyecto nacional ya que ésta se encontraba inscrita en una atmósfera donde el progreso<sup>13</sup> era la meta y el Estado nación un objeto al servicio de ese progreso. Pero afirmaciones como éstas desconocen, primero, que una aspiración de progreso no implica necesariamente la inclusión política de toda la población del país y, segundo, que los imperativos de supervivencia de un grupo social dependían de hacer aparecer el empleo particular de los recursos públicos como tareas nacionales. Su debilidad como grupo, su falta de homogeneidad y su necesidad de configuración global para manipular y hacer frente a las presiones de movilidad social de otros sectores de la sociedad, son interrogantes que van más allá de clasificaciones rígidas e irrazonadas sobre las tradicionales funciones de los distintos actores sociales. Y esta crítica también se hace extensiva a la intocable autonomía de lo popular-indígena cuya exaltación se hace sospechosa de obedecer más a intereses de subordinación que al de pervivencias culturales que favorecen la resistencia étnica.

### 3. ALCANCE DE LOS TERMINOS «ESTADO NACIONAL»

Sería conveniente preguntarse hasta qué punto es factible afirmar que el grupo privilegiado quisiese y debiese realizar configuraciones nacionales y, de suceder éstas, por qué tenían que implicar la participación de los sectores populares mediante la ampliación de la ciudadanía o la representación partidaria. Quizás mejor que buscar culpables de la actual situación de Bolivia conviniera entender la lógica del comportamiento de sus protagonistas y, en concreto, sus prioridades y posibilidades en la concreción de una nación, antes de adjudicarles una función inalterable en dicho proceso. Se hace imprescindible, entonces, distinguir entre lo que hoy se interpreta como Estado-nación y lo que se consideraba como tal en el periodo histórico analizado. Por este motivo, en la discusión sobre si Bolivia pudo o no transformarse en un Estado nacional moderno hay que tener en cuenta tres preguntas. Primera, ¿qué tipo de orden estatal era el buscado?; segunda, ¿quiénes se plantearon la necesidad de que dicho país se convirtiera en un Estado-nación?; y tercero, ¿se logró o no llevar a cabo, y por qué?

---

13. ADLP. Archivo Julio César Valdez. Programa borrador de gobierno de Fernando Huachalla, jefe del Partido Liberal, 1907. «El progreso de los pueblos modernos reposa sobre este axioma: instrucción popular y vías de comunicación».

Para la mancomunidad criolla-mestiza boliviana de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, el Estado era un aparato institucional de dominación con capacidad de responder a las demandas de progreso de la élite boliviana. Tales demandas se referían a la conversión de Bolivia en un país competitivo a nivel internacional, sin que en ningún momento se planteara que ese hecho tuviese que implicar la concesión de ciudadanía a los indios u otros sectores excluidos políticamente, y menos aún que éstos tuviesen que estar representados por medio de partidos políticos. El proyecto de construcción de un Estado-nación estaba gestado por y destinado a los sectores privilegiados. Estos eran quienes tenían que llevarlo a cabo y disfrutarlo, por lo que no se plantearon que otros grupos sociales pudiesen hacerlo. Es más, estos grupos constituían la negación de lo que la élite quería alcanzar, eran la antítesis del progreso y de la modernización pretendidos, y, por lo tanto, no se podía pensar en ellos como sujetos adecuados para una Bolivia nueva que rompiese con un pasado de atraso.

No obstante, que ese modelo nacional boliviano naciera excluyéndoles no significaba que no considerase su integración a través del trabajo. Por supuesto que participarían de los logros nacionales pero lo harían en calidad de mano de obra que dotase a la élite de la infraestructura necesaria para la materialización de sus expectativas. Se mantendría, así, un orden estamental que no sólo no transgrediera los privilegios de los sectores dominantes sino que les permitiese reafirmarse en su situación jerárquica. El proyecto de Estado nacional boliviano fue, en consecuencia, el proyecto de una clase que aspiraba a su propio engrandecimiento y que lo llamaba «nacional» porque no concebía ni se planteaba que otros tuviesen derecho a ello.

En resumen, fueron las diferentes fracciones de la élite boliviana las que se propusieron cambiar la imagen de su país por otra más adecuada a sus deseos de reconocimiento y legitimidad internacionales. Y ese cambio suponía la marginación política de aquellos sectores sociales a los que la élite no consideraba válidos en su diseño utópico de nación. Para justificar esa medida, construyó un discurso en el que abogaba por la futura reincorporación de estos sectores a la vida nacional pero supeditándola a una previa reforma educativa y militar. Esta tendría que ser realizada por los miembros de la élite ya que eran los únicos aptos para ello, con lo que se reservaban señalar el momento en que la población indígena estaría preparada para adquirir la ciudadanía. Mientras tanto confirmaría con su atraso y necesidad de tutela la decisión de excluirlos políticamente.

En cuanto a la tercera pregunta referente a si se logró o no llevar a cabo la conversión de Bolivia en un Estado-nación, convendría tener en cuenta que el éxito o fracaso de ese proyecto no dependía de que los sectores populares tuviesen cabida en él como defiende gran parte de la historiografía mencionada. No era un diseño democrático de participación universal, no se quería solucionar con él las desigualdades sociales y menos permitir que grupos tradicionalmente subalternos tuviesen oportunidad de expresarse. Esperar que la élite boliviana a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX aspirase a lo con-

trario, esto es, a construir una nación fraternal, es aplicarle un anacronismo político. El proyecto nacional fue un proyecto de la élite y para la élite cuyos intereses no involucraban al conjunto del territorio ni a su población. De ahí que su fracaso deba entenderse circunscrito a ella y no causado por la exclusión de sectores subalternos para los que nunca fue diseñado. Esto no quiere decir que los grupos marginados no pugnasen por la movilidad social y la apertura del sistema político. Al contrario, significa que la élite boliviana se veía envuelta en otro proyecto anterior al nacional, es decir, tenía que resolver ante todo su propia continuidad como clase. Dado que era una élite fuertemente fragmentada y enfrentada en su interior, lo prioritario para ella era lograr un consenso intra-élites que diese lugar a una élite hegemónica que articulara al resto. Mientras esto no se produjera, no había que arriesgarse a ninguna empresa que conllevara algún tipo de apertura social. Su reproducción como grupo les hizo, entonces, subordinar el problema nacional sin que esto significase la fragmentación del país. La lucha social entre élites no estaba en contradicción con la perpetuación del orden establecido sino que buscaba ante todo su permanencia, por lo que difícilmente pudieron dividir a la nación más de lo que ya estaba. Además, en última instancia la nación la constituían ellas y se veían obligadas a llegar a algún tipo de acuerdo acerca de qué élite iba a marcar las directrices económicas del país si querían asegurar su supervivencia como grupo. La resolución de ese interrogante conllevó enfrentamientos partidarios y golpes de Estado que, como el ocurrido en 1899, hicieron imprescindible la participación de la población indígena como ejército auxiliar de los liberales contra los conservadores. Fue, entonces, de la debilidad y de las contradicciones surgidas de las disputas internas de la élite de donde partió la ocasión de los sectores sociales excluidos para participar en el destino del país.

La presente propuesta de investigación reside en que al margen del discurso de identidad nacional lo importante para la élite fue su configuración como grupo. Y a esta necesidad subordinó las demandas del resto de los sectores sociales y regionales, hasta el punto de instrumentalizar el «problema indígena» y su inadecuación nacional como argumento de contrarrespuesta. De este modo será el discurso que la élite confeccionó sobre los grupos sociales subordinados el que permitirá establecer el tipo de problemática que se debate en su interior. Hecho que explica y justifica la importancia del indio y del mestizo en el discurso político a pesar de su exclusión real.

De lo dicho con anterioridad se desprende que de todos los discursos debatidos entre los diversos miembros del grupo dominante será el relacionado con el universo indígena (entendido éste en su doble acepción de campesino y de trabajador minero) el que se tendrá en cuenta en esta reflexión. Su dimensión de debate público ayudó a delimitar con mayor claridad las divisiones sociales reduciendo las resistencias al mantenimiento de un orden que favorecía el proyecto de reconstrucción de la élite. Y en éste se manifiesta la capacidad de acción política de un grupo de dirigentes económicos que tenían una mira más clara de sus intereses personales y familiares que del tipo de gobierno y de sociedad que pretendían establecer.

#### 4. LA ELITE Y SU PROYECTO DE RECONSTRUCCION

Para desarrollar las ideas anteriormente esbozadas, este trabajo se centra en un primer momento en la trascendencia que tuvo la guerra federal de 1899 en el proceso de redefinición y reestructuración de la élite boliviana del altiplano<sup>14</sup>. Será objeto de una segunda reflexión la confrontación de los discursos sobre qué hacer con los indígenas con la finalidad de percibir en ese debate la problemática de reconversión en que se ve imbuida la élite.

A partir de la guerra Federal de 1899, que enfrentó a liberales y conservadores bolivianos, y que, a consecuencia del triunfo de los primeros, trasladó la sede de gobierno de Sucre a La Paz, el «problema indio» y su debate se intensificaron<sup>15</sup>. Estaban en cuestión los trueques de poder en el seno del bloque social dominante, trueques que serán institucionalizados desde la guerra del Pacífico (1879-1881) con la presencia de un régimen de partidos políticos<sup>16</sup>. Estos, lejos de representar intereses económicos diferentes, son, por su oposición misma, la expresión del control de la élite sobre el sistema político. Los mecanismos parlamentarios disminuyeron las intermitentes insurgencias bélicas y redujeron los gastos militares causantes del déficit fiscal y del continuo endeudamiento externo de los gobiernos. Todo ello permitió a los sectores sociales con presencia en la esfera de la producción el acceso al control político que se les había negado durante el periodo caudillista, al igual que asegurarse el control de la fuerza de trabajo.

Al mismo tiempo, el régimen partidario terminó con el clima de inestabilidad social presente en ese mismo periodo, con lo que aumentó la capacidad del grupo dominante de controlar la movilidad social y, por tanto, la selección de las contra-élites en ascenso. Más importante aún fue el hecho de que el régimen de partidos políticos garantizara la legitimidad en el poder de aquellos que venciesen en las elecciones. De ahí la necesidad de salvaguardar a toda costa este régimen a pesar de que no siempre se respetasen los resultados de las urnas a causa del fraude y del cohecho electoral. A partir de este momento el debate público comenzó a girar en torno a las argumentaciones sobre las normas constitucionales, es decir, las normas para la circulación de la élite. Esta quedó dividida entre los privilegiados y los excluidos del poder, teniendo estos últimos la opción electoral como medida de desalojo de los primeros y si ésta no funcionaba aún se podía recurrir al golpe de estado. La

---

14. La Guerra Federal de 1899 supuso el traslado de la sede de gobierno, esto es, de la hegemonía política de Sucre a La Paz, hecho que explica por qué es la élite paceña la que define los distintos enfrentamientos entre élites. En la actualidad jurídicamente Sucre es la capital de Bolivia aunque de hecho La Paz funcione como tal y como tal sea reconocida.

15. Sobre la persistencia de una matriz patrimonial véase Víctor Peralta y Marta Irurozqui, «Los bolivianos y el indio. Patrimonialismo y modernización en Bolivia, siglo XIX», ponencia presentada al III Coloquio Internacional del grupo de trabajo FLACSO, «Tradición y modernidad en los Andes», Cochabamba, 1991.

16. James Dunkerley, *Orígenes del poder militar en Bolivia, 1879-1935*, ed. Quipus, La Paz, 1987.

interrupción de la legalidad se hacía empleando un mínimo de violencia y manteniendo intactas las relaciones básicas, las relaciones de poder, lo que evidencia que la problemática política esencial era la circulación de los miembros en el interior de la élite<sup>17</sup>. El «golpismo» fue permitido en la medida en que se dirigiera a restituir en el poder al partido político elegido por sufragio<sup>18</sup>, pero para que esto fuera aceptado el partido aspirante tenía que demostrar la ilegitimidad de su contrario como gobernante. Se iniciaba, así, un juego recíproco de descalificaciones discursivas que explica por qué uno de los temas que con mayor reiteración aparecían en la prensa era el referido a acusaciones de corrupción y malversación de votos<sup>19</sup>, lo que justificó, por otro lado, la intromisión del ejército para restablecer la legalidad del régimen<sup>20</sup>.

Un ejemplo del juego político descrito se manifiesta en la Guerra Federal de 1899. Su importancia residió tanto en la necesidad de un golpe de Estado para que los acuerdos constitucionales se respetasen y, por consiguiente, se produjera la remodelación interna que necesitaba la élite boliviana, como en que para que dicha reestructuración fuera posible se recurrió a la movilización indígena. Este hecho es especialmente significativo en la medida en que determina los acuerdos que estarán presentes en el interior de la élite y el modo en que se van a llevar a cabo. La utilización de sectores sociales subalternos como árbitros del conflicto en el seno del grupo privilegiado iniciará una nueva estrategia política.

La novedad de la participación de la población india como fuerza de apoyo del Partido Liberal del coronel Pando, frente al Partido Conservador del presidente Severo Fernández Alonso (1896-99) no sólo supuso el triunfo de los primeros sino que manifestó la posibilidad del campesinado indígena de compartir el control del Estado con la élite<sup>21</sup>. Posiblemente el miedo a que esto sucediese produjo, tras la matanza de Mohoza (1899)<sup>22</sup>, un rápido acuerdo entre los dos partidos políticos en pugna, más su posterior unión para acallar

---

17. James Malloy, *Bolivia: la revolución inconclusa*, ed. Ceres, La Paz, 1989.

18. «...consolidarse a la sombra del hermoso pabellón sostenido por el Partido Nacional, para oponerse a la propaganda sediciosa, a eso que se llama derecho de insurrección; porque no hay causas ocasionales, ni motivos aparentes de justificación», en *El Comercio*, La Paz, martes 19 de enero de 1892.

19. «He aquí la razón que nos muestra la única propiedad del radicalismo en el poder; la coacción, principalmente en cuanto al sufragio», en *El Comercio*, La Paz, 11 de enero de 1892.

20. «...estamos seguros que harán del ejército, comandado por el general Camacho, el verdadero guardián del régimen legal», en *El Comercio*, La Paz, 12 de noviembre de 1882.

21. Ramiro Condarco Morales, *Zarate, el temible Wilka*, ed. Quipus, La Paz, 1983.

22. En el pueblo de Mohoza fueron asesinados por los indígenas 130 soldados de caballería pertenecientes al escuadrón liberal «Pando». Si bien se habían producido con anterioridad actos semejantes como el de Ayoayo y Corocoro, este era el primero en el que las víctimas pertenecían al ejército liberal, que era al que supuestamente apoyaba la población india aymara, y no al ejército unitario. Ante tal comportamiento las divisiones políticas entre liberales y conservadores se dejaron de lado para atender un conflicto más importante en la sociedad rural que amenazaba las bases del poder de la mancomunidad criolla-mestiza.

dicho levantamiento. Los campesinos amenazaban con la destrucción del sistema vigente en el agro<sup>23</sup> y con el dismantelamiento de la separación étnica. Y esto hacía peligrar la consolidación del proyecto de reconstrucción oligárquica y los términos de su presencia material. Tal proyecto presuponía un grado de homogeneidad y coherencia en el interior de la élite que aún no se había logrado como lo muestra la necesidad de una guerra como la federal. El grupo dominante estaba en un proceso de conformación que lo hacía vulnerable a cualquier ingerencia interna y, por tanto, incapaz de enfrentarse a presiones exteriores que se expresaran en términos de movilidad social. Esto explica su rechazo a cualquier forma de incorporación ciudadana de la población indígena en una comunidad Estado nacional, ya que ello habría significado la participación en la vida política del país de un grupo tradicionalmente marginado de ella cuya inclusión conllevaría una reevaluación de las relaciones de poder y un rediseño de la jerarquía, quebrándose el esquema estamental de dominación. De ahí que uno de los prerequisites para la estabilidad del sistema fuera la pasividad y marginación de gran parte de la población no ciudadana<sup>24</sup>. El racismo será, entonces, más que un sentimiento real o una herencia de la colonia, la consecuencia lógica de la exclusión de dicha población, una excusa justificatoria para evitar la integración de un gran número de personas en un régimen político sin definir.

En resumen, la gran contradicción de la élite residió en que para dirimir los problemas en su interior, una fracción de ésta involucró a los indígenas. La oportunidad de expresión que concibieron éstos no sólo les convirtió en árbitros del conflicto sino en la causa justificante del retraso de la élite en su conformación como grupo de poder asentado capaz de digerir un proyecto de integración y unificación nacional.

La violencia con que se sofocó la sublevación india que siguió a la Guerra Federal expresó la negativa de la élite a aceptarles como copartícipes en la dirección del Estado y en la vida pública. De ahí que la finalidad del proceso de Mohoza residiera en dar ejemplo públicamente de la «criminalidad» india<sup>25</sup>. Este aspecto marca el comienzo de un chantaje político que tendrá como título instrumental «la guerra de castas», logrando que la cuestión india se convierta en el gran debate nacional<sup>26</sup>. Se trata de una discusión referida a cómo y hacia dónde va el proceso de reestructuración de la élite. Se organiza a partir de dos variantes discursivas: indio culpable e indio inocente. Con esa imagen contradictoria de la naturaleza indígena se perseguía, por un lado, instrumentalizar a favor de los liberales y de la élite panceña los miedos interiorizados de la población criolla-mestiza y, por otro, convertir al indio en un ele-

---

23. Andrew Pearse, «Campesinado y revolución: el caso de Bolivia», en Jorge Dandler (comp.), *Bolivia: la fuerza histórica del campesinado*, ed. Ceres, Cochabamba, 1986, p. 337.

24. James Malloy, 1989, p. 53.

25. Marie-Danielle Demelas, «Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880-1910» en *Historia Boliviana*, 1-2, Cochabamba, 1981, p. 63.

26. ADLP. Proceso de Mohoza. Octavo Cuerpo, 1901. f. 24-122.

mento productivo al servicio exclusivo del grupo privilegiado. Veamos con más detalle el contenido de ambas interpretaciones:

A. *La criminalidad innata del indio*<sup>27</sup>. Por medio de la imagen de un indígena sanguinario, de instintos criminales y deseoso de exterminar a la raza blanca, se buscaba impedir que hicieran causa común con los indígenas tanto aquellos sectores de la élite que estaban fuera del poder y aspiraban a él, como aquellos otros, los artesanos mestizos, con quienes se podían establecer lazos de solidaridad horizontal que atentaran contra la hegemonía de la mancomunidad criolla-mestiza. De esta manera se pretendía una tregua que estabilizase al país y condujese la pugna en el interior de la élite por los cauces constitucionales de un régimen de partidos políticos<sup>28</sup>. A partir de entonces, en la visión de la oligarquía, los indios serán el obstáculo fundamental para su existencia. Y dado que el indio se convierte en el único enemigo reconocido por el Estado en el plano de sus anhelos sustantivos, las exigencias de los «desposeídos de la élite» sobre la necesidad de conformar una nación se transforman en un fuerte rechazo hacia los sectores marginales que con su ignorancia y agresividad están impidiendo el progreso de la nación. La población india se ha convertido en ese «otro» que asume cualquier error o desinterés que manifieste el grupo de élite en el poder. Contra los indígenas va dirigido todo el desencanto de ese resto del país que no asume la responsabilidad de sus gobiernos ni de ellos mismos en las características de Bolivia. De esta forma, las posibilidades de diálogo entre ambas partes desaparecen porque la existencia de unos se concibe como el exterminio de los otros, ya que imposibilita una opción de desarrollo que dé a Bolivia presencia internacional. En consecuencia, el proyecto de reconstrucción oligárquica se mantuvo cada vez más excluyente, y ésta exclusión fue incluso admitida por sectores subalternos urbanos, aunque sus posibilidades de ascenso social se iban cerrando progresivamente.

B. *El indio es una víctima de la explotación de siglos*<sup>29</sup>. Los discursos a favor de la redención del indio recogían el debate sobre la modernización de Bolivia, que expresaba como el anterior los problemas de ajuste en el interior de la élite. Estaba en juego la posesión y el uso de la tierra y de la mano de obra, y su modificación podía conducir a un resquebrajamiento de los canales tradicionales de movilidad social y, por tanto, a un cuestionamiento del sistema de clientelas que vincula a terratenientes-mineros-comerciantes, autoridades locales y campesinos. El cambio de las relaciones de poder en el campo significaba una variación de las mismas a nivel nacional, lo que actualizó el problema de la restructuración de la élite. El hecho de que la élite actuara

---

27. ADLP. Colección León María Loza. Correspondencia del señor Carlos Bravo Aspiazu, fundador de la Sociedad Geográfica de La Paz, Sucre, 8 de marzo de 1899.

28. ADLP. Colección Julio César Valdez. Carta a D. Macario Pinilla, Londres, 15 de abril de 1907.

29. ADLP. Colección León María Loza. Borrador sobre la recopilación de leyes y decretos sobre la educación indígena. Redención del indio. Proyecto de Ley de 1900. F. 1-3.

unas veces persiguiendo un proyecto nacional y otras acumulando para su propia reproducción los recursos públicos se traduce en una confusión entre esfera estatal y esfera privada, es decir, en el conflicto de poderes locales y regionales compitiendo con el poder central a través de clientelas que también tenían su expresión en los partidos políticos.

La movilización de mano de obra según las directrices de la modernización agraria<sup>30</sup> podía renovar las propuestas indígenas referidas tanto a participar en el gobierno en calidad de ciudadanos como a reivindicar tierras. Este hecho incide de distinta manera sobre los diversos miembros de la élite a causa de la variedad de sus intereses y actividades. Aunque tales diferencias no impidieron su articulación económica con el exterior ya que la amenaza a su consolidación como grupo proviene de cualquier reforma interna, tampoco permitieron el predominio concreto de los intereses de una fracción de élite debido a las obstrucciones parlamentarias.

Planteadas ambas posiciones, la figura del indio se utiliza como el gran inconveniente que paraliza al país y le impide el progreso. La necesidad de la élite de estabilizar la renta y utilizarla para su propia reproducción, al igual que el miedo a que sus esferas de poder se democratizaran, explica que nunca llegue a darse ninguna comunión cultural con el mundo indígena sino que persista una posición de divorcio con él. Y esta parcelación forzada de intereses e identificaciones sociales favorece la no conformación de un nuevo orden político. El indio será la gran excusa paralizadora, el chantaje de una élite que en su búsqueda de estabilidad habla de nacionalismo teniendo un proyecto básicamente excluyente<sup>31</sup>, exclusión que en las regiones del Altiplano se justificó por el terror que inspiraba lo indio y que en las de Cochabamba y Santa Cruz se tradujo en una lucha entre el centralismo del Estado y las regiones.

La multiplicidad de posiciones que desencadenaron ambos problemas se convirtió en la característica diferenciadora de los partidos políticos. El acceso al poder de los distintos miembros de la élite quedó regulado según la postura que mantuviese su partido con respecto al debate constitucional de los asuntos señalados. Pero esto no evitó que para el derrocamiento de un gobierno se llevara a cabo la movilización, a través de clientelas, de aquellos sectores populares que buscaban el reconocimiento de la legitimidad de sus reclamaciones y la incorporación de sus representantes al Estado. Sin embargo, este tipo de acciones no serán muy corrientes, ya que en la mayoría de los casos el empleo del descontento popular continuará al nivel de discurso<sup>32</sup>.

---

30. Erick Langer, «Mano de obra campesina y agricultura comercial en Cinti, 1880-1930» en *Historia Boliviana*, n.º 3, Cochabamba, 1983, p. 72.

31. ADLP. Colección Julio César Valdez. Cartas de Eliodoro Villazón a Julio César Valdez. Buenos Aires, 19 de septiembre de 1900.

32. El golpe de Estado de Bautista Saavedra en 1920 que supone la sustitución del partido liberal por el partido republicano es un ejemplo del empleo de consignas pro-populares para acceder al poder, y por lo tanto significa la ruptura con el miedo a este tipo de movilizaciones que había quedado establecido a raíz de la guerra federal de 1899.

La construcción del Estado nacional, entendido éste como un proyecto de unificación e integración de toda la población boliviana bajo la categoría de ciudadanos, nunca se llevó a cabo simplemente por el hecho de que en ningún momento la remodelación del país se planteó de ese modo. Estado nacional significaba progreso y modernización y tales términos no presuponian una ampliación de la inclusión política sino mayores posibilidades de engrandecimiento de los sectores dominantes. Pero este esfuerzo de la élite por consolidar su posición hegemónica le hizo sacrificar a miembros de su propio grupo, con lo que se crearon mayores disensiones en su interior que dieron paso a la injerencia de otros grupos sociales. Estos fueron llamados por esos mismos miembros de la élite que eran excluidos del control del gobierno, y se renovó, en consecuencia, el conflicto intra-élite, paralizándose cualquier iniciativa de avance por parte de alguna de las fracciones del sector privilegiado. De ahí que la propuesta de este trabajo resida en negar una voluntad prioritaria de las élites bolivianas en la elaboración de un Estado nacional. Estaba en juego su reproducción como grupo y a la construcción de éste lo subordinaron todo. Pero con ello sacrificaron también su reproducción ampliada al dejar pendiente tanto la cuestión indígena como la regional y al reducir a mero discurso las iniciativas de remodelación que necesitaban el país y ella misma.